

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 406

MAGISTRADO PONENTE: VICTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DIAZ

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-011-2017-00107-01.
DEMANDANTE:	BERTHA GLADYS GUTIERREZ VELASQUEZ zulaydalila@yahoo.es
DEMANDADO:	- HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” direccionggeneral@huv.gov.co notificacionesjudiciales@huv.gov.co - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA oscarpb86317@gmail.com njudiciales@valledelcauca.gov.co
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CADUCIDAD – FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

Aprobada en Sala y Acta de la fecha.

I. OBJETO DE LA DECISION

Se decide el recurso apelación, propuesto por las entidades demandadas contra el auto interlocutorio No. 848 proferido en audiencia inicial del 28 de noviembre de 2019 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali, que pospuso la decisión de la falta de legitimación en la causa para el final del proceso y declaró no probada la excepción de caducidad.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, a través de apoderada judicial, la señora Bertha Gladys Gutiérrez Velásquez demandó al Departamento del Valle del Cauca y al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” y solicitó¹ la nulidad del Acuerdo nro. 020 del 26 de octubre de 2016 y del oficio nro. 01.MA.00266 del 27 de octubre de 2016, por el cual se comunicó la supresión del empleo de Profesional Universitario -Código 219-Grado 2 que desempeñaba la actora.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E.” el reintegro de la demandante al cargo que venía desempeñando u otro empleo de superior categoría con retroactividad al 27 de octubre de 2016.

De igual forma, solicitó reconocer y pagar todas las sumas correspondientes a salarios, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir, con efectividad a la fecha de su desvinculación hasta cuando sea reincorporada al servicio.

¹ Ver folio 2 y 3

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA

Mediante auto interlocutorio No. 848 se decidió posponer la decisión de la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento del Valle del Cauca, y declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por el Hospital Universitario del Valle.

En síntesis, consideró:

- Que los actos administrativos demandados fueron notificados a la demandante mediante comunicación remitida por la empresa de mensajería certificada 4/72 con número de guía EDN 664347196Q donde se evidencia como fecha de recepción el día 4 de noviembre de 2016 a las 5:25, por lo que es a partir del día siguiente que deberá empezar a contar los cuatro (4) meses que establece la Ley para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento. Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación se radicó ante la Procuraduría el día 24 de febrero de 2017, la constancia suscrita el 25 de abril de 2017 y la demanda radicada el 2 de mayo de 2017, es claro que el medio de control fue ejercido dentro del término.
- Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, consideró prudente posponer la decisión para que una vez valorado el material probatorio y en caso de prosperidad de las pretensiones se decida la entidad responsable en el presente asunto.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Sostienen los recurrentes:

- Recurso de apelación frente a declarar no probada la excepción de caducidad: *“...Si bien es cierto a la funcionaria se le hace envío de una comunicación del despido con fecha como lo refiere el despacho, los actos administrativos que desarrollan la reestructuración administrativas del Hospital son de fecha 26 de octubre de 2016, los cuales fueron comunicados desde esa misma fecha y fueron publicados para notificación de todos los funcionario el día 1 de noviembre de 2016, en las carteleras de intranet de la entidad y en los pasillos de la entidad, es decir, que desde esa fecha fueron notificados todos los funcionarios del Hospital Universitario del Valle de la terminación de los contratos laborales derivada de la reestructuración administrativa que había tomado la entidad, entonces para la defensa es claro que obro el termino de caducidad”* (transcripción literal minuto 07:35 al 08:58 - fl. 55 Cd).
- Recurso de apelación propuesto contra la decisión de posponer la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva para el fondo del asunto: *“...Considero que el Despacho en este momento debería de pronunciarse respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento, pues como claramente lo expusimos en nuestra contestación la parte demandante en ningún momento argumenta que se presente hecho alguno que fundamente alguna pretensión que genere responsabilidad a mi representada, de igual manera el Departamento del Valle del Cauca no tiene injerencia en las decisiones y el Hospital Universitario del Valle de conformidad con las normativas que fueron citadas en la contestación de la demanda tienen autonomía administrativa, tiene todos los presupuestos procesales para responder en caso de que se halle alguna responsabilidad en cabeza del mismo...”* (transcripción literal minuto 09:16 al 10:02– fl. 55 Cd)

V. CONSIDERACIONES

V.1. PROBLEMAS JURÍDICOS

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- *¿En el presente caso es procedente declarar probada la excepción de caducidad propuesta por el apelante al considerar que la notificación del acto demandado se surtió el día 26 de octubre de 2016 o por el contrario como lo dedujo la A quo la notificación del acto administrativo que definió la situación particular de la parte actora se surtió el 4 de noviembre de 2016, siendo la demandada presentada en término?*
- *¿Se encuentra legitimado por pasiva el Departamento del Valle del Cauca para actuar en el presente proceso o tal como lo sostiene el apelante la entidad no tuvo injerencia en la producción del daño que alega la parte demandante y por tal razón debe ser excluida del proceso?*

V.2. TESIS

- Respecto a la caducidad la providencia apelada será confirmada, teniendo en cuenta que en el presente caso el acto administrativo que afectó la situación particular de la actora fue el Acuerdo No. 020 del 26 de octubre de 2016, expedido por la Junta Directiva del HUV, y notificado el 1 de noviembre de 2016; por lo que el término de los 4 meses comenzó desde el 2 de noviembre de 2016, siendo suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación el 24 de febrero de 2017 y reanudado el 25 de abril de 2017, presentándose la demanda el 02 de mayo de 2017, es decir, dentro del término establecido por la Ley.
- Respecto a la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento del Valle del Cauca, esta Corporación considera que la misma es procedente, si a consideración se tiene que el Hospital Universitario del Valle constituido como una ESE es una entidad pública, con categoría especial, descentralizada, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa para proferir los actos administrativos que dieron origen a la demanda.

Para arribar la anterior decisión, se realizará: i) un recuento normativo y jurisprudencial acerca de las excepciones previas de caducidad y de falta de legitimación en la causa por pasiva; y, ii) análisis al caso concreto.

V.3. CUADRO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

- El artículo 164 numeral 2 literal d) del CPACA, en relación con la oportunidad para presentar la demanda del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, prevé:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución, o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales. (...)” (subraya y negrilla fuera de texto).

Esta institución jurídica se estableció por el Legislador como una forma de lograr la seguridad jurídica que propende por el interés general, la cual es de obligatoria observación y aplicación por el juzgador al momento de encontrarse probada.

El Consejo de Estado, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. De ahí, a que las partes les correspondan asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho².

Cabe resaltar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

• Falta de Legitimación en la Causa.

La legitimación se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Del mismo modo que, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. Por tanto, la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo.

Frente a lo anterior, se trae a colación el pronunciamiento del Consejo de Estado en Sentencia dentro del proceso con Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08625-01 del 28 de julio de 2011, con ponencia del Consejero Dr. Mauricio Fajardo Gómez, que señaló:

“(...) se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

² Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014.

-

Por su parte, la **legitimación material** en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, (...)

Así pues, toda vez que la **legitimación en la causa de hecho** alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

(...)” (Subrayado del Tribunal.)

5.4 CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328³ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306⁴ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose **solamente** sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

5.4.1. CADUCIDAD

La señora Bertha Gladys Gutiérrez Velásquez, a través de apoderado judicial interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital Universitario del Valle – Evaristo García E.S.E., solicitó la nulidad del acuerdo nro. 020 del 26 de octubre de 2016, y la comunicación nro. 01.MA.00266 del 27 de octubre de 2016, relativos a la supresión del cargo que ocupaba la actora en la entidad demandada.

A través del auto proferido el 28 de noviembre de 2019, el Juzgado Once Administrativo Oral de Cali declaró NO probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que los actos administrativos fueron notificados según correo certificado el día **4 de noviembre de 2016**, contándose a partir del día siguiente de dicha fecha los 4 meses que establece la Ley para ejercer el medio de control, término que fue suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación radicada ante la Procuraduría el día 24 de febrero de 2017, y reanudado el 25 de abril de 2017 y radica la demandada el día el 2 de mayo de 2017, es decir dentro del término legal.

Sea lo primero indicar, que, respecto del acto de comunicación de la supresión del cargo, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente⁵:

“(...) Igualmente, esta Corporación ha considerado que el acto general que suprime los cargos de la planta de personal y el oficio que comunica dicha decisión configuran actos integradores, de

³ ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

⁴ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

⁵ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. César Palomino Cortés, sentencia del 7 de junio de 2018, proceso con radicado 08001-23-31-000-2010-00221-01(2015-12)

modo que el segundo acto solo da eficacia al primero y únicamente se tiene en cuenta para el cómputo de la caducidad, así:

“En algunos casos, se configuran verdaderos actos integradores conformados por el acto definitivo (general) que ordena la supresión, y el acto de ejecución (particular) mediante el cual se le comunica al servidor público la decisión y de esta forma la misma produce efectos. Cabe precisar que este segundo acto, sigue la misma suerte del acto principal (definitivo).

En esos eventos y en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en principio bastaría con demandar el acto definitivo que determinó la supresión de los cargos, considerando en todo caso, que el acto de ejecución sigue la misma suerte del principal o definitivo y cobra importancia en la medida en que además de que lo torna eficaz, debe ser tenido en cuenta para efectos del cómputo del término de caducidad de la acción (que se cuenta a partir del día siguiente en el que el funcionario conoció la decisión). También resulta válido que el funcionario al que se le suprimió el cargo impugne en vía judicial tanto el acto definitivo como el de ejecución, y con ello plantaría la litis de un modo más claro y completo, tal y como ocurrió en el caso concreto.

En el mismo contexto, por regla general no resultaría posible demandar solamente el acto de ejecución a menos que éste, por las particularidades del caso, se torne en definitivo (evento en el cual no se configuraría el acto integrador). En esta hipótesis el último acto podría demandarse de manera autónoma”⁶.

Ahora bien, dentro de las eventualidades que pueden surgir es dable que el acto general sea el que concreta la decisión de suprimir los cargos, caso en el cual, la comunicación es un simple acto de ejecución, como se señaló en la sentencia del 18 de febrero de 2010, en los siguientes términos:

“En los eventos en donde el acto general concreta la decisión de suprimir el cargo, la comunicación se convierte en un acto de simple ejecución, por ende, la sola impugnación de este acto genera inepta demanda, ya que no pone término a una actuación administrativa, respondiendo a la lógica, que la eventual declaratoria de nulidad del oficio de comunicación dejaría con plenos efectos jurídicos el acto que suprimió el cargo, o el que no lo incorporó a la nueva planta de personal, imposibilitando legalmente el restablecimiento del derecho (...)”⁷.

Así las cosas, cuando el acto administrativo suprime toda la planta de personal, la comunicación que pone en conocimiento esa decisión es un mero acto de ejecución, que al no demandarse no impide un pronunciamiento sobre la legalidad del acto general que suprimió un cargo. En efecto, esta Corporación afirmó en la providencia del 27 de febrero de 2013 que “el citado oficio no es enjuiciable debido a que esta Jurisdicción está facultada para juzgar actos administrativos; y si en gracia de discusión pudiera anularse la comunicación, ello resultaría infructuoso, pues no tendría ningún efecto jurídico respecto de los actos que determinaron la supresión del cargo (...)”⁸.

De lo expuesto, se concluye que en el caso objeto de estudio, el memorial No. 01.MA.00266 del 27 de octubre de 2016, por el cual el Gerente General (E) del HUV, le comunicó a la señora Bertha Gladys Gutiérrez Velásquez la supresión de su cargo, ordenada mediante el Acuerdo No. 020 del 26 de octubre de 2016, no es el acto que definió su situación particular, en la medida que toda la planta de personal se suprimió en atención al referido acto administrativo.

⁶ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia del 7 de junio de 2012, proceso con radicado 15001-23-31-000-2002-01595-01 (1717-09)

⁷ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2010, Consejero Ponente doctor Gustavo Gómez Aranguren, número interno 1712-2008, actor Hugo Nelson León Roza.

⁸ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia del 27 de febrero de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-000-2007-01010-01 (1519-12)

De ahí que el acto pasible de control judicial no es el memorial No. 01.MA.00266 del 27 de octubre de 2016 sino el Acuerdo No. 020 del 26 de octubre de 2016 que suprimió los cargos de dicha entidad y por tanto, es a partir de la notificación de este último acto (**1 de noviembre de 2016**) que debe contabilizarse la caducidad.

En ese orden de ideas, se advierte que en el presente caso el acto administrativo que afectó la situación particular de la actora fue el **Acuerdo No. 020 del 26 de octubre de 2016**, expedido por la Junta Directiva del HUV, comunicado mediante memorial No. 01.MA.00266 del 27 de octubre de 2016, **y notificado el 1 de noviembre de 2016**⁹; por lo que el término de los 4 meses comenzó a correr desde el 2 de noviembre de 2016, suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación el 24 de febrero de 2017 y reanudado el 25 de abril de 2017¹⁰.

Así las cosas, la demandante tenía hasta el 02 de mayo de 2017 para interponer la demanda y conforme con el acta de reparto visible a folio 30, la misma se radicó el **02 de mayo de 2017**, cuando no había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.

Por lo anterior, se confirmará la decisión proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral de Cali, que declaró No probada la excepción previa de caducidad de la acción y la terminación del proceso.

5.4.2. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:

El apoderado del Departamento del Valle del Cauca en síntesis manifestó que el *a quo* debió pronunciarse respecto de la excepción propuesta, al considerar que la parte demandante en ningún momento argumentó hecho alguno que generara responsabilidad sobre su representada, añadiendo que la entidad no tiene injerencia alguna sobre las decisiones del Hospital Universitario del Valle, pues este cuenta con autonomía administrativa y tiene todos los presupuestos procesales para responder.

Por su parte, la *a quo* consideró prudente posponer la decisión para que una vez valorado el material probatorio y en caso de prosperidad de las pretensiones se decida la entidad responsable en el presente asunto.

Al respecto, la Sala considera que contrario a lo manifestado por la *a quo*, en esta instancia es posible determinar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Valle del Cauca, por las razones que a continuación se exponen:

El artículo 1° del Decreto 1876 de 1994 establece que la naturaleza jurídica de Empresas Sociales del Estado constituye una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas y reorganizadas por la ley o por las asambleas o consejos.

Por su parte, mediante Decreto departamental nro. 1807 del 7 de noviembre de 1995, proferido por el Gobernador del Valle del Cauca, el Hospital Universitario del Valle fue transformado a Empresa Social del Estado, en cumplimiento de los artículos 194 y 197 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con el referido decreto, el Hospital Universitario del Valle es una entidad pública con categoría especial, descentralizada, del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo

⁹ Ver Cd fl. 72 Anexo nro. 16 (Certificación de Publicaciones Acuerdo nro. 020)

¹⁰ Ver folios 28 y 29

III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, y sus decretos reglamentarios 1876 de 1994, 1757 de 1994 y 2993 de 2011.

Por lo tanto, en razón de su autonomía el HUV, se organiza, se gobierna y establece sus normas y reglamentos, de conformidad con los principios constitucionales legales que le permiten desarrollar los fines para los que fue constituida. Tal como sucedió en el presente caso donde el HUV expidió el Acuerdo de reestructuración nro. 20 de 2016, que suprimió el cargo que desempeñaba la actora.

En consecuencia, conforme lo ha precisado el Consejo de Estado, no es suficiente con que se le endilguen imputaciones generales a las entidades, para considerar que las mismas se encuentran legitimadas en la causa, para ello se requiere que las imputaciones que se endilgan guarden una relación fáctica, jurídica y directa con los hechos y las pretensiones de la demanda, y como quiera que en el presente caso las pretensiones tienen como sustento la supresión del cargo de la actora en virtud del acuerdo de reestructuración nro. 20 de 2016, es evidente que el Departamento del Valle del Cauca, no estaría llamada a reparar los perjuicios reclamados, pues no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, por ausencia de relación procesal.

Por lo anterior, respecto a este punto se revocará la decisión proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral de Cali, para en su lugar, declararla probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Valle del Cauca.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

R E S U E L V E:

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto interlocutorio nro. 848 proferido en la audiencia inicial del 28 de noviembre de 2019, por el Juzgado Once Administrativo Oral de Cali, en lo que tiene que ver con declarar no probada la excepción de caducidad de la acción.

SEGUNDO.- REVOCAR el auto interlocutorio nro. 848 del 28 de noviembre de 2019, respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Valle del Cauca, y su lugar, se declara probada tal excepción.

TERCERO.- Ejecutoriada la presente providencia envíese el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES
Magistrada



RADICACIÓN	: 2017-00107-01
Medio de control	: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante	: BERTHA GLADYS GUTIERREZ VELASQUEZ
Demandado	: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE – EVARISTO GARCÍA y OTROS
Asunto	: APELACION DE AUTO

9



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada



VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado